

# PARIDAD EN TODO: DE LA REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA A LA PARIDAD SUSTANTIVA EN LOS EJECUTIVOS LOCALES<sup>1</sup>

AUTORA: FLOR ANGELI VIEYRA VÁZQUEZ<sup>2</sup>

## INTRODUCCIÓN

En México, avanzar hacia la “paridad en todo” ha sido y continúa siendo un desafío, especialmente, en el ámbito municipal y en los espacios unipersonales, sin embargo, como resultado de los procesos electorales 2023-2024, es posible advertir avances significativos impulsados por la lucha política de diversas feministas desde múltiples espacios.

Por lo anterior, la presente investigación recuperará el antecedente de los procesos electorales 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 donde las decisiones de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales jugaron un papel importante para lograr que 9 gobernadoras (eventualmente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitó licencia para postularse como candidata a la presidencia de la República) ejercieran el cargo de manera simultánea, sin dejar de considerar que, a pesar de ello, 18 Entidades Federativas nunca había sido gobernados por una mujer.

De cara a los procesos electorales de 2023-2024, ante las omisiones legislativas a nivel Federal y Local y siguiendo los criterios emitidos por la Sala Superior del TEPJF, el INE emitió el Acuerdo INE/CG569/2023, con el fin de garantizar la paridad en la postulación de las candidaturas de las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno que se elegirían en dichos procesos. Los partidos políticos (ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común) deberían postular al menos cinco mujeres candidatas privilegiando su participación en entidades con mayor competitividad.

Las resistencias volvieron a presentarse, no obstante, resultaron electas cuatro titulares de los Ejecutivos Locales: tres gobernadoras y una Jefa de Gobierno. En este sentido, desde las

---

<sup>1</sup> La presente ponencia se basa en el artículo “¿Paridad en todo?: De los referentes simbólicos a la paridad sustantiva en las gubernaturas” publicado en la *Revista Electio* N. 25, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como de la Tesis Doctoral “Justicia Electoral de Género: Análisis de Sentencias sobre el Principio Constitucional de Paridad en Puestos Unipersonales desde la Epistemología Feminista”, autoría de la ponente.

<sup>2</sup> Dra. Flor Angeli Vieyra Vázquez. Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Correo electrónico: angelivieyra@gmail.com

nociones de régimen electoral de género y justicia electoral de género, en esta investigación se analizarán los Procesos Electorales Locales de 2023-2024, donde la lucha por la “Paridad en Todo” hará posible que en nuestro país haya 13 mujeres en los ejecutivos a nivel local.

## I. LA PARIDAD COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

...vi con toda claridad cómo a cada “¡estás loca!, ¡eso no va a suceder jamás!, ¡es una utopía!” decenas o cientos, a veces miles de mujeres, contradijeron, en los hechos semejante mentira... Y “la utopía” se ha vuelto realidad muchas veces... No hemos terminado. Pero ya sabemos: ¡Las utopías se cumplen! Y no sólo eso, ¡abren camino a nuevas utopías!

CECILIA LAVALLE TORRES

La democracia paritaria se inscribe en la “vindicación” cuyo objetivo consiste en repartir paritariamente el poder político, además, plantea que la participación en lo político y las tareas que derivan de dicha participación debe recaer igualmente entre mujeres y hombres. La noción de la democracia paritaria surge a partir de la contradicción entre el aumento de mujeres en muchos de los ámbitos de la vida social y su ausencia de los espacios donde se votan las leyes y se toman las decisiones que afectan su vida y la de toda la sociedad (Amorós, 1997; Cobo, 2002).

La importancia de que haya mujeres en los puestos de decisión política es una forma de acceder a la justicia y al mismo tiempo sirve para escuchar la voz de diversas individualidades, aprovechar las ventajas que otorga la pluralidad y la diversidad de pensamientos.

Las condiciones de equidad y el marco jurídico de igualdad se han alcanzado y se seguirán logrando gracias a las luchas políticas, pues la historia nos ha demostrado que los derechos se conquistan a través de la práctica política y se refuerzan en un ordenamiento

jurídico. Esta triangulación nos obliga a reconocernos como sujetos activos de transformación y al mismo tiempo, corresponsables de la situación actual.

Entender los efectos de la paridad sustantiva en tanto principio constitucional, requiere verla de manera integral para constituir un horizonte estratégico donde la paridad trascienda lo político y su dimensión cuantitativa hacia la representación política. Demanda modificar las formas de pensar en torno a los roles de género y, para lograr tal cometido, se requiere plantear soluciones integrales, multidimensionales y multisectoriales para poder orientar un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos asuman responsabilidades y derechos en condiciones de igualdad (Brockmann, 2017; Freidenberg, 2018).

La expresión ¡sin mujeres no hay democracia! revela que, desde las condiciones mínimas de una democracia procedimental es necesario que las mujeres sean parte de las decisiones colectivas. Cada paso que los derechos políticos de las mujeres conquistan, presenta nuevos desafíos: en las instituciones electorales, en los partidos políticos, en el Estado y en la sociedad, su materialización exige revisar las particularidades de cada caso concreto y nos obliga a poner énfasis en la importancia de la interseccionalidad. Avanzar hacia la igualdad jurídica, implica nombrar nuestras diferencias a partir del reconocimiento de nuestra pluralidad y procurar que dichas diferencias no se traduzcan en desigualdad y discriminación, sólo así podremos aspirar a una democracia constitucional más sólida.

Es importante recordar que la paridad apareció en Francia como el resultado de su peculiar contexto sociohistórico. Desde 1880 Hubertine Auclerc se negó a pagar impuestos hasta que no le fuera otorgado el derecho al voto y marcó la pauta para la demanda del sufragio hasta llegar al denominado “*mouvement pour la parité*” considerado como el movimiento feminista que impulsó la paridad a partir de tratar de reconfigurar el universalismo francés, incrementando el número de mujeres en los puestos de elección. Joan Scott señala que a Francia se le considera como el primer país a nivel mundial en insistir que el 50% de las personas candidatas a cualquier puesto de elección sean mujeres, a partir de su denominada “Ley de la parité” (Ferreira, 2015; Scott, 2012).

Las paritaristas francesas criticaron dos cuestiones: una de ellas fue sobre la formación y los efectos de los Estados-Nación cuyo fundamento a través de la teoría contrafáctica del “contrato social”, advirtieron que éste fue (siguiendo la metáfora) discutido, pensado y firmado únicamente por los hombres, negándoles la condición de sujetos políticos a las

mujeres; y, la segunda cuestión (la más importante para el movimiento) fue una crítica al universalismo francés, es decir, a la concepción del individuo abstracto singular.

Con base en lo anterior, las partidarias de la paridad intentaron desexualizar la representación nacional sexualizando al individuo, apostaron por “reconocer la universalidad en la diferencia física de los sexos” y sostuvieron que la paridad no era una acción afirmativa, ya que lo que buscaban era “redefinir quién cuenta como individuo, implicaba una verdadera concreción de los principios de la democracia republicana”. Protestaban por la exclusión sistemática de las mujeres de las filas de legisladores elegidos por una estructura de partidos que funcionaban como una fraternidad cerrada, considerando que esta situación además de injusta era antidemocrática (no representativa) y, por tanto, las mujeres debían acceder a los puestos de toma de decisiones (Scott, 2012: 17-21).

Desde luego, también es importante considerar el contexto internacional. El primer referente sobre el término de paridad se ubica “en un seminario organizado por el Consejo de Europa en 1989 que se denominó ‘La democracia paritaria. 40 años de actividad del Consejo Europeo’” (Ferreira, 2015: 11). A manera de marco histórico, se suele remitir a las plataformas de acción de la CEDAW, en algunos casos se retoma el antecedente de Nairobi (1985) pero generalmente se da mayor importancia a la Cuarta Conferencia celebrada en Beijing (1995). En dichas conferencias, estuvo manifiesto el compromiso de los Estados en integrar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres por medio de leyes y de políticas públicas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos en el ámbito internacional, Françoise Gaspard establece que la palabra paridad se dejó de oír en las conferencias de las Naciones Unidas desde comienzos del siglo XXI, señala que fue un tema significativo durante la Conferencia de Pekín en 1997 pero se optó por abandonar el término de paridad para empezar a emplear la noción de “equilibrio” que se considera menos restrictivo (Gaspard, 1999: 58).

En los últimos años, la paridad se concibe como “el término con el que actualmente se nombra el objetivo principal de la agenda feminista en las democracias avanzadas: la participación cuantitativamente homogénea y equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones” (Ferreira, 2015: 10). La paridad electoral debe mirarse como un nuevo “contrato social” para regir la vida en sociedades democráticas (Hernández, 2017: 51).

Al respecto, Leticia Bonifaz afirmó: “La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una medida compensatoria... es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos... es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública” (Bonifaz, 2016: 1).

En suma, la figura jurídica de la paridad apareció por primera vez en Francia con un sentido estrictamente electoral, no obstante, los fines del movimiento paritarista buscaban una transformación social más amplia que ahora se conoce como paridad sustantiva, ésta, se ha convertido en la apuesta de aquellos regímenes que aspiran a denominarse democracias constitucionales.

Por lo que se refiere al caso mexicano, en 1916 se reunió el Congreso Constituyente en Querétaro con el objetivo de redactar la nueva Constitución; sin duda, el resultado fue una Constitución innovadora e inspiradora para otras naciones por su contenido social que expresaba algunas de las demandas de los caudillos de la Revolución Mexicana. Si bien es cierto que existieron avances significativos para las mujeres en cuanto al derecho laboral e incluso posteriormente hubo reformas importantes en el Código Civil, lo cierto es que desde una mirada feminista, el reconocimiento a la Constitución de 1917 por su contenido social, se ve empañado por carecer de la garantía de igualdad jurídica entre hombres y mujeres y por negar a las mujeres el ejercicio del principal derecho político que es considerado la piedra angular de cualquier Estado democrático: el derecho a votar y ser votadas. Es importante recordar que la Constitución tuvo que esperar 36 años para reconocer a las ciudadanas mexicanas y 57 años para establecer la igualdad jurídica respecto a los hombres.

Como sugiere Ferrajoli, la igualdad jurídica “es una norma que tiene el fin de proteger y valorizar las diferencias y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades... es un principio normativo que requiere la protección de las diferencias, empezando por la diferencia de género” (Ferrajoli, 2010: 1). Cada una de las transformaciones al ordenamiento jurídico que intentan hacer más igualitarias las relaciones entre hombres y mujeres muestran que el Derecho no sólo es un mecanismo de dominio, sino que también es un instrumento de liberación. En este sentido, Alda Facio señala que “El Derecho a pesar de ser un obstáculo para el desarrollo humano de la personalidad femenina, puede ser un instrumento de cambios estructurales, culturales y personales, lo cual necesariamente llevará, a largo plazo, a un mejoramiento en las condiciones en que vivimos las mujeres” (Facio, 1992: 16).

Cambiar las reglas del juego para que las mujeres pudieran ser reconocidas como ciudadanas, no ha sido una historia sencilla, se ha requerido de años de lucha política y el desafío actual implica que no basta con poner un piso parejo entre unas y otros para llegar al poder político, sino también para ejercerlo en condiciones paritarias. En este sentido, para lograr la paridad electoral en México, es menester señalar que desde 1996 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) estableció de forma indicativa la cuota de 30 % de candidaturas de un mismo sexo para la elección de diputados y senadores, misma que se convirtió en obligatoria y sancionable a partir de la reforma de 2002, no obstante, si la integración de las listas era resultado de elecciones primarias al interior de los partidos políticos, se exceptuaba la obligatoriedad de la cuota. Con la reforma de 2007-2008, el porcentaje de la cuota incrementó a 40 % y las listas de representación proporcional debían considerar la alternancia entre los géneros sin importar las suplencias, manteniendo la excepción de las elecciones primarias, dando paso a la intervención del TEPJF en una de las sentencias más trascendentales: la Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados, cuyos elementos fueron constitutivos de la reforma política electoral de 2014 (Cerva y Ansolabehere, 2011; Torres, 2012; Freidenberg y Alva, 2017).

Finalmente, como resultado de la reforma político-electoral de 2014, la CPEUM estableció en su Artículo 41, Fracción I que: “Los partidos políticos tienen como fin... garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales” (CPEUM, artículo 41, fracción 1, 2014), este mandato constitucional se amplió en La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

Ahora, bien, lograr la “paridad en todo” ha sido y continúa siendo uno de los desafíos más grandes tanto en el ámbito municipal como en los espacios unipersonales. Considerando la evolución normativa de la paridad en México, es importante insistir que este logro no habría sido posible sin la lucha política de diversas feministas. Al respecto Freidenberg y Gilas señalan que: “En 2019 el colectivo Mujeres en Plural, junto a un conjunto de mujeres de diversos partidos y redes de mujeres, impulsaron la iniciativa Paridad En Todo, que estableció la exigencia de integración paritaria de los órganos de las tres ramas y tres niveles de gobierno, así como de los órganos autónomos...De esta manera, México se convierte en

el primer país de la región en exigir la paridad no sólo en el registro de candidaturas, sino también en todos los espacios de poder” (Freidenberg y Gilas, 2021: 113).

Con base en la reforma publicada el 6 de junio de 2019, el Artículo 41 constitucional establece: “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio” (CPEUM, Artículo 41: 2019). Sin duda, materializar la paridad ha enfrentado diversas resistencias, no obstante, su defensa y exigencia ha permeado de múltiples sectores de la sociedad donde ya no basta con la paridad descriptiva, sino que ésta también sea sustantiva e incluyente.

## II. ¿PARIDAD EN TODO?

En el caso de las gubernaturas, a manera de contexto histórico, de 1953 a 2018, en México sólo 7 mujeres habían ocupado el cargo como gobernadoras por elección popular (una más lo había hecho como interina y otra como sustituta) respecto a 344 hombres, por lo cual, en 25 Entidades nunca había gobernado una mujer y, por tanto, no se había roto el techo de cristal en esos espacios. Otro dato importante revela que en los procesos electorales transcurridos de 2015 a 2020, después del reconocimiento de la paridad como principio constitucional, sólo 41 mujeres habían sido candidatas para ser gobernadoras respecto a 185 hombres.

Con base en la recuperación documental e histórica de Cecilia Lavalle y Teresa Hevia, detallan que “en 2020, Selene Vázquez, aspirante a la gubernatura por Michoacán y las organizaciones Equilibra y Litiga, solicitaron al Consejo General del INE la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad en gubernaturas... La Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE respondió que la organización de los procesos locales corresponde a los OPLEs. El TEPJF mediante Sentencia SUP-JDC-2729-2020, ordenó al Consejo General dar respuesta a la consulta formulada.” (Lavalle y Hevia, 2024: 117).

Bajo este escenario, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, el 6 de noviembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG569/2020 con el objetivo de obligar a los partidos políticos a postular al menos siete mujeres de las 15 gubernaturas que se elegirían en los comicios de junio de 2021, sin embargo, el Acuerdo fue impugnado por: el Senado de la República, el Partido Acción Nacional; el Partido de Baja California; y por un Juicio ciudadano para la protección de los Derechos Político-Electorales.

Desde la sesión del Consejo General del INE los planteamientos versaban en los límites y efectos aplicar el principio de paridad en espacios unipersonales. Posteriormente, una vez aprobado el Acuerdo, en un contexto que cuestionó las facultades del INE pero también en un ambiente crispado que mostraba nuevamente las resistencias a la paridad en todo, el asunto llegó a la Sala Superior y en la Sentencia SUP-RAP-116/2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a los partidos políticos a postular a siete mujeres como candidatas en las 15 gubernaturas que estaban en juego en ese momento.

Como se señaló previamente, la lucha política ha sido un componente fundamental en la progresividad de los derechos de las mujeres y en esta ocasión, nuevamente, las alianzas entre el activismo y la academia se hizo presente desde las redes sociales y desde todos los espacios posibles, bajo la consigna ¡Paridad en gubernaturas YA! En el contexto de pandemia en el que aún se encontraba nuestro país, el espacio virtual se convirtió en un lugar de protesta. En términos numéricos, resultaron electas seis gobernadoras<sup>3</sup> y, por primera vez en la historia de nuestro país, siete mujeres fueron titulares del Ejecutivo Local de manera simultánea.<sup>4</sup> Cabe señalar que en las entidades de Baja California, Campeche, Chihuahua y Guerrero se rompió el techo de cristal.

Para los Procesos Electorales Locales de 2021-2022, el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG1446/2021, en el que se estableció que de las seis gubernaturas que se renovarían, los partidos políticos deberían postular a mujeres candidatas en por lo menos tres de ellas. Derivado de lo anterior, resultaron electas dos gobernadoras más en las

---

<sup>3</sup> Las seis mujeres electas como gobernadoras fueron: Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California; Layda Elena Sansores San Román en Campeche; Indira Vizcaíno Silva en Colima; María Eugenia Campos Galván en Chihuahua; Evelyn Salgado Pineda en Guerrero; y Lorena Cuellar Cisneros en Tlaxcala.

<sup>4</sup> En ese momento, Claudia Sheinbaum Pardo, se desempeñaba como Jefa de gobierno en la Ciudad de México.



entidades de Aguascalientes y Quintana Roo<sup>5</sup>, donde también se rompió el techo de cristal. En suma, como consecuencia de estos procesos electorales, en México habría nueve mujeres titulares del Poder Ejecutivo Local (ocho gobernadoras y una jefa de gobierno).

En los Procesos Electorales Locales de 2022-2023 en Coahuila y Estado de México se renovaron las gubernaturas sumando una gobernadora más<sup>6</sup>. El resultado de esos esfuerzos llevó a que, previo a los procesos de 2023-2024, hubiera 9 gobernadoras (la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México contaba con licencia ya que fue una de las candidatas a la presidencia de la República), no obstante, aún eran 18 Estados los que nunca han sido gobernados por una mujer.

Ante las omisiones legislativas a nivel Federal y Local y siguiendo los criterios emitidos por la Sala Superior del TEPJF, el INE emitió el Acuerdo INE/CG569/2023, con el fin de garantizar la paridad en la postulación de las candidaturas de las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno que se elegirían en los procesos de 2023-2024. Los partidos políticos (ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común) deberían postular al menos cinco mujeres candidatas privilegiando su participación en entidades con mayor competitividad.<sup>7</sup>

Las resistencias volvieron a presentarse, no obstante, resultaron electas cuatro titulares de los Ejecutivos Locales: tres gobernadoras<sup>8</sup> y una Jefa de Gobierno<sup>9</sup>. De esta manera, la lucha por la “Paridad en Todo” hará posible que en nuestro país haya 13 mujeres en los ejecutivos a nivel local.

---

<sup>5</sup> En Aguascalientes la gobernadora electa fue María Teresa Jiménez Esquivel y en Quintana Roo María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.

<sup>6</sup> En el Estado de México resultó electa Delfina Gómez Álvarez.

<sup>7</sup> Ver: INE/CG569/2023. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual, atendiendo los criterios de las Sentencias SUP-RAP- 116/2020, SUP-JDC-91/2022, SUP-JDC-434/2022 y SUP-RAP-220/2022, y el incidente oficioso de incumplimiento de Sentencia se emite el procedimiento para garantizar el Principio de paridad de género en la postulación de Candidaturas a las Gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los procesos electorales locales 2023-2024 en los que participen los partidos políticos, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común. Disponible en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/154308/CGex202310-24-ap-01.pdf> (consultada el 8 de marzo de 2024).

<sup>8</sup> En Veracruz la gobernadora electa fue Norma Rocío Nahle García; en Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo; y en Morelos Margarita González Saravia.

<sup>9</sup> En la Ciudad de México resultó electa Clara Marina Brugada Molina.

Reconocer constitucionalmente la paridad en México en 2014, representó el inicio de un nuevo paradigma. Su origen estrictamente electoral se concentró en asegurar que las candidaturas a puestos de elección popular fueran de forma paritaria entre hombres y mujeres, sin embargo, desde los procesos electorales de 2015 en los tres niveles de gobierno existieron diversos problemas para la materialización de la paridad electoral mismos que han tratado de ser resueltos a partir de un trabajo conjunto entre las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales así como del involucramiento y trabajo colectivo con el activismo y la academia. Si consideramos las condiciones para una democracia constitucional es necesario que las mujeres sean parte de las decisiones colectivas y para arribar a ello, se requiere la garantía y ejercicio de sus derechos de libertad, pero también de sus derechos sociales, sólo así podremos estar en condiciones de fortalecer una democracia constitucional que se caracterice por ser paritaria sustantiva e incluyente.

Los resultados en torno a la paridad son cada vez más alentadores, pero no podemos perder de vista que estos resultados equivalen a más de un siglo de lucha política feminista en nuestro país, así como del trabajo interinstitucional que ha adoptado medidas para extender el horizonte de la paridad y sus efectos hasta reconocerla como principio constitucional, con el fin de configurar sociedades más igualitarias en el menor tiempo posible y más allá del ámbito político-electoral.

Son muchos los pendientes con la ciudadanía de las mujeres, sin embargo, mientras exista un desfase entre los avances jurídicos y la cultura política, será necesario trabajar constantemente en la dimensión cultural para transitar hacia una democracia paritaria. Desde la justicia electoral de género y el régimen de electoral de género, se abren nuevas posibilidades para avanzar hacia la paridad sustantiva.

### III. JUSTICIA ELECTORAL DE GÉNERO Y RÉGIMEN ELECTORAL DE GÉNERO

Es importante comenzar por mencionar que, con mayor frecuencia, en la academia se suele hacer uso de la noción de régimen electoral de género, el cual

“se caracteriza por la aprobación de mecanismos de acción afirmativa (cuotas) y/o de la incorporación constitucional del principio de paridad de género en el registro de

candidaturas que presentan partidos a cargos de representación popular. Una de las claves está en el modo en que las reglas formales generan incentivos y candados para incidir sobre las decisiones de las dirigencias partidistas respecto a cómo se ubican las mujeres y los géneros en las candidaturas a cargos de representación popular” (Freidenberg, 2022: 23).

Si bien esta noción se centra en las reglas formales para acceder al poder político, desde esta investigación se busca ampliar el horizonte, no sólo de mujeres candidatas sino de todos aquellos espacios que implicaron el cambio de “paridad en todo”, consolidando el camino hacia democracias paritarias, sustantivas e incluyentes. Considerando que la justicia electoral es una parte fundamental del constitucionalismo, ya que es una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o posteriormente a las elecciones, con relación a la renovación de los integrantes de los poderes públicos (Arreola, 2013: 17), posee un papel relevante ya que de ella depende la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y de los partidos políticos, su objetivo radica en hacer cumplir las reglas del juego democrático, que dicho juego sea limpio, sin ningún tipo de violencia, donde la cancha sea pareja para todas las personas que aspiran a algún cargo público y donde la voluntad ciudadana sea respetada.

En este contexto, vale la pena preguntarnos sobre el papel de la justicia electoral en la protección y materialización de los derechos político-electorales de las mujeres. De ahí que en esta investigación se pretenda apostar e impulsar la noción de justicia electoral de género, como una alternativa para definir a las decisiones judiciales que han logrado ver y revertir la desigualdad histórica y estructural entre hombres y mujeres, no sólo en las candidaturas sino en cualquier espacio de decisión política y que, además, se basa en la epistemología feministas, tomando en consideración los siguientes aspectos:

La epistemología feminista... explica por qué la entrada de mujeres feministas en las diferentes disciplinas académicas, especialmente en biología y en las ciencias sociales, ha generado nuevas preguntas, teorías y métodos; muestra cómo es que el género ha jugado un papel causal en estas transformaciones, y propone estos cambios como avances cognitivos y no sólo sociales, ya que la ciencia se ha distorsionado con supuestos sexistas en sus conceptos, teorías y aproximaciones metodológicas, por lo que es importante describir y considerar el contexto social, histórico, político y cultural en que se realiza la actividad científica... Partiendo de lo anterior, se puede decir que entre

los temas centrales de la epistemología feminista se encuentran: la crítica a los marcos de interpretación de la observación; la descripción e influencia de roles y valores sociales y políticos en la investigación; la crítica a los ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, así como las propuestas de reformulación de las estructuras de autoridad epistémica (Blázquez 2012, 22-23).

En este sentido, desde las diferentes perspectivas que el prisma del Derecho nos ofrece para mirarlo y entenderlo, resultan imprescindibles la perspectiva de la filosofía jurídica; la perspectiva de la axiología jurídica y; desde luego, la teoría feminista. Debido a la complejidad del contexto, es necesario buscar respuestas, las mejores posibles, para hacer que el derecho cumpla uno de sus objetivos que tanta falta hace en este país, a saber, la materialización de la justicia.

En nuestro país, el trabajo jurisdiccional ha tenido un papel sumamente importante para equilibrar las reglas del juego democrático, pero también para asegurar que los derechos humanos, en este caso, los derechos político-electorales de todas las personas se respeten, mostrándonos su trascendencia en las dos dimensiones que constituyen la democracia constitucional.

Ahora bien, con base en lo anterior, es importante destacar que cuando nos referimos a la justicia electoral de género, implica juzgar considerando las desigualdades históricas estructurales que persisten entre unas y otros sin perder de vista otras miradas: intercultural; descolonial; y antirracista, con el fin de poder aplicar las nociones de justicia particular a cada caso concreto desde una noción de justicia universal.

Podemos advertir que dotar de adjetivos a la noción de justicia podría colocarnos en un terreno complejo, sin embargo, es importante mencionar que cada uno de dichos adjetivos se traduce en el avance progresivo de los derechos humanos de las personas, de ahí que se desprenden categorías como: justicia inclusiva o justicia electoral abierta.

Proponer la noción de justicia electoral de género concentra en ella los criterios para juzgar con perspectiva de género pero, al mismo tiempo, implica dar forma y solidez a un ámbito de la doctrina jurídica en materia electoral, cuyo impacto y ejercicio tiene trascendencia dentro de la democracia constitucional y, desde luego, de cara a la consolidación de democracias paritarias, sustantivas e incluyentes, requiere reconocer que sus efectos trascienden el quehacer jurídico en beneficio de los cambios socioculturales.

Preguntarnos, cómo hacer llegar el Derecho Electoral a los múltiples y diversos sectores de la población, es una preocupación y ocupación en la que diversas investigadoras e investigadores en diferentes latitudes han buscado aportar. Esto ha implicado plantear nuevas metodologías de enseñanza e investigación del Derecho. En este contexto, resulta importante: a) Emplear la categoría de justicia electoral de género; y b) Analizar la justicia electoral desde la perspectiva de tecnología de género acorde a la propuesta feminista de Teresa de Lauretis, desde la perspectiva de la cultura pop y desde las reflexiones de Virginia García Beaudox, Janaina Maciel Molinar y Cindy Carolina Martínez Lagos respecto a la perspectiva del reencuadre y la female gaze.

Como se ha dado cuenta anteriormente, cada uno de los derechos humanos que las mujeres podemos ejercer y exigir en la actualidad, son el resultado de luchas políticas ubicadas en los movimientos feministas. La política, el derecho, la justicia y la democracia han sido objeto de análisis desde los múltiples feminismos propiciando su paulatina transformación con la incorporación de las mujeres en cada uno de estos ámbitos.

Se ha señalado también la importancia de eliminar la mirada patriarcal del Derecho para reconocer los mismos Derechos Humanos para las mujeres y, por su puesto, tomar en cuenta la desigualdad histórica y estructural entre unas y otros, al momento de impartir justicia. Al respecto, por lo que refiere a la propuesta sobre la noción de Justicia Electoral de Género, vale la pena recordar a Celia Amorós cuando refiere que “conceptualizar es politizar” (Amorós, 2004: 3) esto es, “pasar de la anécdota a la categoría” (Amorós, 2004: 3). Nociones como: feminicidio; feminicida; violencia política en razón de género; estereotipos de género; techos de cristal, de cemento, de billetes; piso pegajoso; paridad; perspectiva de género, entre otras, son conquistas políticas que nos ayudan a entender la realidad, a reconfigurar el lenguaje, el Derecho, los tipos penales, al acceso a la justicia y analizar la desigualdad entre unas y otros, así como entre la diversidad de historia de vida de las mujeres. No se puede omitir mencionar que lastimosamente, algunas de esas nociones llevan inscritos los nombres y las vidas de muchas mujeres.

Lograr la denominada reforma de “paridad en todo” ha sido resultado de las transformaciones en las reglas del juego para acceder y ejercer el poder político, ubicadas en el componente democrático del modelo de democracia constitucional antes referido, abriendo paso a la noción de régimen electoral de género. En esta medida, la noción de

*justicia electoral de género* pretende aportar al componente del constitucionalismo, reiterando la importancia de la división de poderes y del acceso a la justicia en condiciones de igualdad de derechos.

#### BIBLIOGRAFÍA

Amorós, Celia. 1997. *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*. Madrid: Cátedra.

\_\_\_\_\_. 2004. Conceptualizar es politizar. Conferencia presentada en las “Jornadas Sin equívocos: violencia de género y otras formas de violencia en el seno de las familias”, 17 y 18 de noviembre, Madrid: Ed. UNAF en colaboración con el Min. Asuntos Sociales, 2006. pp. 19-30, disponible en <https://www.copclm.com/wp-content/uploads/2021/04/Conceptualizar-es-politizar-Master-en-malos-tratos-y-VG-UNED.pdf> (consultada el 5 de enero de 2024).

Arreola, Álvaro. 2013. *La justicia electoral en México. Breve recuento histórico*. México: TEPJF.

Blázquez, Norma, Fátima Flores y Maribel Ríos, coords. 2012. *Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales*. México: UNAM-CEIICH-CRIM-Facultad de Psicología.

Bonifaz, Leticia (2016). *El principio de paridad en las elecciones: aplicación resultados y retos*, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos Humanos, disponible en [https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos\\_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf](https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf) (consultada el 12 de julio de 2024).

Brockmann, Erika. 2017. El acoso y la violencia política en Bolivia: Lecciones aprendidas. En *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina*, eds. Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle, 263-284, México: UNAM-IIIJ-TECDM.

- Cerva, Daniela y Karina Ansolabehere, dir. 2011. Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales en México. México: TEPJF-UNAM.
- Cobo, Rosa. 2002. “Democracia paritaria y sujeto político feminista”. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, España, pp. 29-44, disponible en <https://revistaseug.ugr.es> (consultada el 12 de julio de 2024).
- Facio, Alda. 1992. “Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal)”, ILANUD, San José, Costa Rica, 113 pp, disponible en [http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16\\_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/1\\_Alda%20facio\\_Cuando\\_el\\_gen\\_suena\\_cambios\\_trae.pdf](http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/1_Alda%20facio_Cuando_el_gen_suena_cambios_trae.pdf) (consultada el 12 de julio de 2024).
- Ferreya, Marta. 2015. *Paridad. Un nuevo paradigma para la acción de las mujeres*, México: ILSB.
- Freidenberg, Flavia 2018. ““Ellas también saben”: estereotipos de género, resistencias a la inclusión y estrategias para feminizar la política”. *Revista pluralidad y consenso*, Núm. 35. México, pp. 86-101, disponible en <http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/issue/view/50/showToc> (consultada el 12 de julio de 2024).
- \_\_\_\_\_. 2022. La construcción de democracias paritarias: reglas del juego, actores críticos y resultados (in) esperados. En *La construcción de democracias paritarias en América Latina. Régimen electoral de género, actores críticos y representación descriptivas de las mujeres*, eds. Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, 19-61, México: INE-UNAM-III.
- \_\_\_\_\_ y Karolina Gilas 2019. En nombre de los derechos y a golpe de sentencias: el impacto de la justicia electoral sobre la representación política de las mujeres mexicanas. Texto preparado para su discusión en el Seminario Permanente de “Reformas electorales y democracia”, organizado por el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, el 19 de agosto

de 2019, Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/index/seminarioreformaselectorales-freidenberg-y-gilas-4408.pdf> (consultada el 3 de junio de 2022).

\_\_\_\_\_ y Raymundo Alva. 2017. ¡Las reglas importan! Impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel. En Freidenberg 2017, 1-43.

Gaspard Françoise 1999. “Paridad: ¿Por qué no?”. Historia, Antropología y Fuentes Orales, No.22, ¿Igualdad – Paridad?, pp.57-65, disponible en [https://www.jstor.org/stable/27753002?origin=JSTORpdf&seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/27753002?origin=JSTORpdf&seq=1#page_scan_tab_contents) (consultada el 12 de julio de 2024).

Hernández, Ninfa. 2017. ¡Las mujeres (también) ganan elecciones! La representación descriptiva de las mujeres en las Entidades Federativas en México. En Freidenberg 2017, 46-79.

Lavalle, Cecilia y Teresa Hevia 2024. *El deber de la memoria. Del derecho al voto a la paridad en todo*. México:12624 Consultoras, S.C.-DEMOS

Scott, Joan. 2012. *Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés*. México: FCE.

Torres Falcón, Marta. 2012. El principio de igualdad y las acciones afirmativas. Un análisis desde los derechos humanos. En Serret 2012, 93-120.